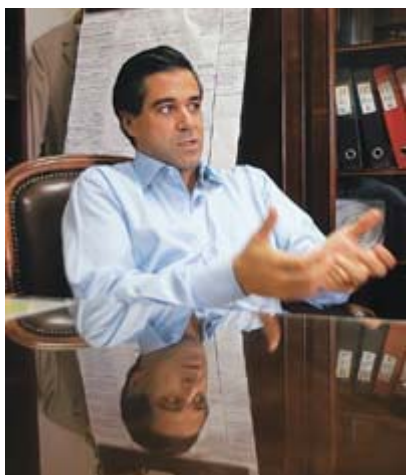


DANIEL RAFECAS, EL JUEZ QUE PROCESO A FERNANDO DE LA RUA POR LAS COIMAS

“Me vi obligado a imputar a De la Rúa”

Tiene cuarenta años y es parte del recambio del fuero federal. Además de los sobornos en el Senado, investiga los crímenes de la dictadura en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.



El juez federal Daniel Rafecas consideró a Fernando de la Rúa el “máximo responsable” del pago de sobornos.

Subnotas

- [Poder Judicial y Ejecutivo](#)

Por Victoria Ginzberg

Debajo del vidrio de su escritorio está el acta de la vista a las cárceles que hizo en Perú, en 1821, José de San Martín. Allí se dejó constancia de que San Martín entrevistó a los presos y dispuso la abolición de los tormentos “mandando que jamás se hiciera uso de los horrendos calabozos conocidos con el nombre de infiernillos, en donde se sepultaban, se desesperaban y morían los hombres”. No es el único toque sanmartiniano del despacho: hay un busto, un cuadro y un libro del prócer. El “fan” es el juez federal Daniel Rafecas, que esta semana procesó al ex presidente Fernando de la Rúa como “máximo responsable” del pago de sobornos a senadores.

Rafecas tiene cuarenta años y más de veinte en la Justicia, donde ingresó como meritorio. En 2004 fue nombrado juez federal. Es parte del recambio en el fuero más cuestionado durante el menemismo, servilleta de por medio. Además de la investigación sobre las coimas en el

Senado, donde hay otros nueve imputados (el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el arrepentido Mario Pontaquarto y seis ex senadores) el juez está a cargo de la causa sobre los crímenes de la última dictadura en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. En el despacho que alguna vez fue de Carlos Liporaci (que renunció cercado por una denuncia por enriquecimiento ilícito) Rafecas habla con Página/12.

–De la Rúa dijo que el fallo tuvo motivaciones políticas. ¿Qué responde?

–No puedo emitir opiniones sobre lo que digan las partes. Están en todo su derecho de hacer especulaciones conforme a su estrategia. Por supuesto que son infundadas. Yo asumí en octubre de 2004 pero el concurso en el que me anoté comenzó en 2001, cuando De la Rúa era presidente. Gané durante la gestión de (Eduardo) Duhalde. Lo único que hizo (Néstor) Kirchner fue no alterar el orden de mérito que ya había sido fijado. Si la crítica viene por ese lado, no tiene fundamento.

–¿Hay pruebas suficientes para que De la Rúa llegue a juicio?

–Todo procesamiento aspira a que el caso termine en el juicio.

–Pero, a su entender, lo que hay alcanza para que sea considerado responsable.

–Sí. Eso está en la resolución.

–Hay nueve imputados que estaban cerca de ir a juicio y ahora deberán esperar a De la Rúa. ¿Sería mejor hacer dos juicios o aguardar y unificar?

–El esfuerzo gigantesco que lleva un juicio de esta características es mejor hacerlo una sola vez. Es un desgaste tremendo. Pero ¿por qué se atrasó lo de De la Rúa? Cuando asumí él no figuraba como imputado. Cuando dicto el primer procesamiento, en agosto de 2005, me veo obligado institucionalmente a sostener y a señalar a De la Rúa como imputado.

–¿Por qué obligado?

–Por las conclusiones a las que arribo. Digo que tanto Flamarique como De Santibañes como (José) Genoud estaban involucrados, entonces, necesariamente tengo que avanzar sobre De la Rúa. Ese procesamiento quedó firme en diciembre de 2005 y por lo tanto la causa contra De la Rúa comienza en febrero de 2006, hace dos años.

–¿Hay una deuda sobre la realización de un gran juicio por corrupción?

–Como juez no puedo opinar. Puedo entender que haya una parte de la ciudadanía que así lo considere.

–¿Es extraño que haya una causa tan avanzada sobre el gobierno de De la Rúa y no sobre Carlos Menem?

–Eso lo escuché mucho. Pero no es tan así. No hay mucha conciencia de que Menem está procesado por contrabando de armas, que tiene escalas penales mayores que la que pesa sobre De la Rúa.

–¿Cuánto de la causa depende de Pontaquarto?

–El arrepentido no es Mario Pontaquarto de carne y hueso sino lo que él declaró. Eso ya está confirmado por entrecruzamientos telefónicos, declaraciones, pericias, pruebas documentales. Un momento importante va a ser el juicio oral, donde la expresión, la elocuencia y la seguridad de quien confiesa tiene que ser evaluada.

–¿Qué fue lo más difícil de probar?

(Piensa un rato.) –Sigue siendo difícil la procura de otros posibles cohechados. Estamos investigando a otros posibles partícipes de la maniobra.

–¿Cómo fue la actitud de De la Rúa cuando vino a declarar?

–Fue muy correcto y respetuoso. Después, la impresión que me causó en las indagatorias la dejé plasmada en la resolución.

–Ahí hay reproches para el ex presidente, por ejemplo, respecto de que sus colaboradores mintieron en la causa (*cuatro fueron denunciados por falso testimonio*)

–Y sí... bueno. También vuelve sobre una pericia que fue declarada falsa y los peritos están procesados. La verdad es que es medio agravante.

–En el fallo se menciona que hubo dos “realidades paralelas”: la legal y la criminal y hay una comparación con la dictadura. ¿Se pueden establecer puntos de contacto?

–La idea es que resulta muy funcional establecer una cortina con una pátina de legalidad detrás de la cual se pueden cometer los crímenes con una mayor expectativa de impunidad.

–Y De la Rúa llegó al gobierno con la honestidad como principal tema de campaña.

–En su caso era más aprovechable.

–¿Ceyó en su honestidad en 1999?

–No puedo contestar eso.

–Entonces ¿no me va a decir si lo votó?

(Se ríe.) –No. No. Me reservo el derecho a no revelar el voto.

–Le tocó un juzgado con dos causas importantes, las coimas en el Senado y los crímenes de la dictadura. ¿Fue una lección de historia?

–Fue un desafío profesional, es un desafío profesional inmenso. Soy consciente de la trascendencia que tienen esos casos y me dediqué a transmitirlo a mis colaboradores.

–¿Qué fue lo que más lo conmovió de la investigación del Primer Cuerpo de Ejército?

–Cuando hay chicos en los relatos: chicos en centros clandestinos o utilizados para arrancar confesiones de los padres, la apropiación de recién nacidos, las embarazadas. Otro tema es la tortura, los relatos de cómo las personas eran sometidas a un régimen de despersonalización, de cosificación. El contacto con el mal absoluto.

–¿Qué cambios se pueden implementar para acelerar los juicios sobre la dictadura?

–El modelo procesal es mejorable. El proceso de instrucción es lento. Pero mientras el código siga siendo el vigente, los jueces tenemos que respetarlo. En la Capital Federal hay un solo tribunal oral que se encarga de este tema. Eso necesariamente desemboca en un retraso en la fijación de las audiencias. Entiendo que se están estudiando distintas variables.

–En sus fallos habla de puntos de contacto con el Holocausto. Para algunos son situaciones que no se pueden comparar...

–La despersonalización a la que eran sometidos los cautivos tiene puntos de contacto con los campos de concentración. También hay puntos divergentes. La masividad de los campos de concentración alemanes difiere de los centros clandestinos. Detectamos en todos los centros clandestinos que muchos perpetradores eran simpatizantes del nazismo. Había un especial ensañamiento antisemita. Había svásticas, cuadros de Hitler.

–Hubo fallos que hablaron de genocidio en la Argentina. Para usted ¿se aplica el concepto?

–Desde el punto de vista jurídico se hace difícil sustraerse a lo que ha declarado la Convención Internacional sobre Genocidio y el Tratado de Roma, que excluyen los crímenes por razones políticas. Pero es una discusión terminológica. Que no se diga en el ámbito jurídico no quiere decir que no se pueda decir en el ámbito filosófico o sociológico. Las repercusiones en las víctimas e imputados en nada cambia que lo definamos como genocidio o crímenes de lesa humanidad. Ambos son imprescriptibles.

–¿Algún represor aportó algo a la investigación?

–No. Se negaron a declarar o ensayaron una estrategia de defensa.

–¿Hay forma de romper ese “pacto de silencio”?

–No tenemos herramientas. Tenemos que garantizar el derecho a la defensa. Si indujéramos al acusado o lo presionáramos para extraerle información, estaríamos utilizando las herramientas del modelo autoritario que estamos impugnando.